



**OBSERVACIONES DE LA ASOCIACION PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE LA AFABETIZACIÓN MEDIÁTICA (Alfa-Media) A LA CONSULTA PÚBLICA
SOBRE LA PROPUESTA DE CARTA DE DERECHOS DIGITALES**

20 de diciembre de 2020

La presente aportación la realiza:

Asociación para la promoción y desarrollo de la alfabetización mediática (Alfa – Media)
Paseo de la Castellana nº 123, Escalera Izquierda, 5ºA
28046 - Madrid

Introducción

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sometido a consulta pública la propuesta de Carta de Derechos Digitales elaborada por el Grupo de Expertos constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), con el fin de recabar observaciones a dicha propuesta por parte de personas y entidades de los diferentes ámbitos involucrados.

Tal y como se indica en la introducción a la Carta y en los primeros párrafos de la misma, su fundamentación radica en el conjunto de derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución Española, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por nuestro país. Con el principio básico de que el desarrollo del entorno y el espacio digitales en modo alguno supongan menoscabo de esos derechos fundamentales histórica y universalmente consagrados.

Ello implica, como también se señala, la necesidad de asegurar que el marco normativo garantiza la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas en una sociedad digital ubicua de cuyos entornos, dispositivos y servicios dependemos más cada día. No se trata tanto de descubrir “nuevos” derechos digitales cuanto de proyectar el ordenamiento vigente sobre la realidad tecnológica mediante la adaptación e interpretación, o, en todo caso, la concreción de los derechos fundamentales más relevantes en el entorno y los espacios digitales identificando derechos instrumentales o auxiliares de dichos derechos fundamentales.

La Carta de Derechos Digitales se relaciona directamente con los notables avances ya realizados en España para el reconocimiento de estos derechos digitales a través del Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, de modo más específico, el Real Decreto-Ley de trabajo a distancia. Pero también se vincula a lo contemplado en las últimas décadas en normas como la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación y la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Habría que mencionar también, a mayor abundamiento, las progresivas actualizaciones de la Ley General de Telecomunicaciones; de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, especialmente en lo relativo a las ventas a distancia y al comercio electrónico, el Código Europeo de las comunicaciones electrónicas o la nueva Directiva de Servicios Digitales.

Nos encontramos, en definitiva, ante la propuesta de un documento que se presenta como marco de referencia con vocación de ser ampliamente compartido para inspirar y liderar la acción de los poderes públicos y contribuir a los procesos de reflexión que se están produciendo en Europa para garantizar una digitalización humanista. Un texto que pone a las personas en el centro y cuyos principios permitirán a los ciudadanos desenvolverse en el entorno digital en que ya nos encontramos, aprovechando y desarrollando todas sus potencialidades y oportunidades y conjurando sus riesgos.

Observaciones generales

Desde Alfa-Media reconocemos como de enorme valor el texto sometido a Consulta Pública, no sólo por su contenido, sino por el proceso colaborativo que ha guiado su elaboración. Creemos que define con bastante amplitud los grandes aspectos de los derechos fundamentales traspuestos y adaptados al entorno de las NTC.

Se indica que la Carta de Derechos Digitales tiene un carácter descriptivo, prospectivo y prescriptivo, pero no normativo. Este aspecto, sin que en modo alguno signifique un reparo a la importancia de la Carta en sí, es el que nos lleva a plantear la conveniencia de aprovechar la reflexión en torno a la misma para ampliar, actualizar y mejorar el conjunto de derechos digitales recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, dando lugar incluso a una norma específica con el mismo rango, o al menos, a un desarrollo reglamentario de la LOPDPGDD.

En todo caso, el carácter declarativo de la Carta hace que el desarrollo de su contenido quede a expensas de los proyectos normativos del legislador y, por lo tanto, que sea necesario instrumentar acciones de comunicación específicas para alentar la demanda social e incorporar las distintas acciones propuestas a la agenda pública.

Por otra parte, es paradójico constatar cómo, a pesar del carácter declarativo del texto, algunos de los apartados están redactados como si de una norma legal se tratase. Así, la Carta señala que “se prohíben los tratamientos de la información (...)” (IX.3) o “Se consideran ilícitas (...)” (IX.4). En este sentido, un cambio de la forma de presente por la de futuro podría ser más apropiado al alcance del documento, que en todo caso sería conveniente revisar desde el punto de vista de la comunicación pública tanto o más que desde el enfoque de la actual redacción, hecha con una perspectiva esencialmente legalista.

El documento es necesariamente abierto y por esa razón, creemos que su versión final debería ir acompañada de algunos anexos que reflejaran aspectos esenciales para un desarrollo de todo su potencial. En ese sentido, debería avanzarse un modelo de revisión. El desarrollo de las TIC es acelerado y muy bien podría suceder que en un periodo breve de tiempo las cautelas actuales queden obsoletas ante determinados avances.

Es también importante un anexo que cruce los derechos de la Carta con las normas legales existentes (o no), subrayando la cobertura o la necesidad de modificar o redactar nuevas normas para hacer efectivos los derechos de la Carta. Esta guía es esencial en la confección de un plan de acción o una hoja de ruta que pueda desarrollar la potencialidad de la Carta.

Del mismo modo, es importante para el desarrollo de la iniciativa vincularla con los objetivos ODS y compartirla con instancias europeas como el Consejo de Europa para que su proyección supranacional permita paliar el evidente inconveniente de estar afrontando a través de normas nacionales cuestiones que incumben a potentes operadores globales con sedes y operaciones distribuidas por todo el mundo.

Observaciones específicas

XV. Derecho a la educación digital

Se utiliza en la Carta el término “educación digital”, en consonancia con el recogido en la LOPDGDD, en lugar del ya consolidado por la UNESCO y propia Unión Europea de **“alfabetización mediática e informacional”** (*media and information literacy* - MIL).

Sería deseable cambiar la denominación en favor de su armonización internacional (tal y como habría que hacer con las referencias a la “alfabetización mediática” en la Directiva de Servicios Audiovisuales actualmente en proceso de trasposición), teniendo en cuenta, además, que el proceso de aprendizaje al que el nuevo entorno obliga es transversal en todos los grupos de edad. El uso de la denominación “educación digital” puede entrañar el riesgo de circunscribirlo, siquiera inconscientemente, a los más jóvenes. Esta cuestión no es menor, ya que sin una alfabetización adecuada de todos los ciudadanos no será posible el desarrollo efectivo de los derechos digitales.

Consideramos, en este sentido, que el título del epígrafe debería ser revisado y su primer apartado debería referirse de modo general al derecho a la alfabetización mediática e informacional de toda la ciudadanía, incluyendo una definición de la misma. Partiendo de las propias referencias de la UNESCO, y por no repetir conceptos que en el resto de numerales se mencionan y desarrollan, cabe hablar de la alfabetización mediática e informacional como el conjunto de competencias y habilidades necesarias para el empoderamiento y el desarrollo independiente y consciente de las personas en el entorno digital, con el fin de buscar, evaluar, utilizar y crear la información de una forma eficaz para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas.

Tras ese comienzo, deberían recogerse los principios que son de aplicación a la ciudadanía en general, y finalmente, los relativos al ámbito específicamente educativo. A este respecto sugerimos una redacción del epígrafe del siguiente tenor (entre paréntesis la numeración del borrador propuesto):

1(5). Se impulsará la formación orientada a la Ciudadanía Digital, con el desarrollo de competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Esta dimensión pasa por cuestiones como:

- a) El aprendizaje para hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como la protección de los datos personales y el respeto a la intimidad y privacidad personal y familiar; la identificación y rechazo de las noticias falsas y las estrategias de desinformación; así como la evitación de comportamientos en la red que puedan comprometer la salud y/o bienestar propio y de terceros.*
- b) El desarrollo del pensamiento crítico, que ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que permita rechazar estereotipos discriminadores, los discursos de odio o el ciberacoso.*
- c) El fomento de la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, responsable.*

2(3). Los poderes públicos con competencia en la materia promoverán:

- a) Los planes de formación profesional que se ordenarán a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital.*
- b) La formación de personas adultas con particular atención a los mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión.*
- c) El desarrollo normativo y de sistemas de correulación que contemplen de modo transversal la importancia de la alfabetización mediática e informacional en todos los ámbitos*

3(4). Se reconoce el derecho a la libertad de acceso a la educación y a la libertad de creación de centros que presten sus servicios a través de entornos digitales, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto al cumplimiento de la normativa educativa y de la obligación de la escolarización presencial en los niveles de educación obligatoria.

4(1). El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente la atención a la diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, con la inclusión de aquéllos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

5(2). El profesorado recibirá la formación para adquirir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

=====